

ESTRICTAMENTE PROHIBIDA SU DIVULGACION HASTA el 19 de ABRIL

Libia Grueso, Buenaventura, Colombia

Una líder afrocolombiana por los derechos civiles

Libia Grueso, trabajadora social y cofundadora del Proceso de Comunidades Negras (PCN), es una de los intelectuales activistas más importantes del movimiento pro derechos civiles de los afrocolombianos. A principios de los años noventa encabezó junto a otros líderes del movimiento una campaña que logró obtener para las comunidades negras rurales de Colombia derechos territoriales sobre más de 2.4 millones de hectáreas. Hoy día, ella centra su atención en la protección de la región selvática del Pacífico colombiano, zona que enfrenta la creciente amenaza del conflicto armado, la degradación ecológica, y el desplazamiento masivo y emplazamiento de pobladores afrocolombianos.

Los bosques pluviales de Colombia: una región amenazada

Colombia es uno de los cinco países con la mayor diversidad de especies de fauna y flora del mundo entero; en Colombia viven más tipos diferentes de aves y anfibios que en cualquier otro lugar del planeta. Pero una larga historia de explotación colonial más cuatro décadas de “guerra sucia” y una próspera industria de los narcóticos han creado una catástrofe ecológica. Estas actividades han destruido cerca del 30 por ciento de los bosques tropicales y colocado a numerosas especies animales y vegetales al borde de la extinción. Se pronostica una caída del 40 por ciento en las reservas de agua dulce del país durante los próximos cincuenta años.

Ubicada entre la más occidental de las cordilleras andinas y el Océano Pacífico, y durante mucho tiempo sumida en el olvido y un aislamiento relativo, la región costera del Pacífico colombiano es el hogar del 30 por ciento de los 10.6 millones de afrocolombianos (el 26% del total de la población en Colombia) descendientes negros de esclavos emancipados en 1851, sin ningún tipo de reparación. En la década de 1980, la región costera del Pacífico, la más pobre del país, comenzó a despertar el interés de promotores extranjeros. Empresas multinacionales entraron a la región para explotar sus recursos naturales, tales como el oro y el petróleo, e introducir monocultivos foráneos como la palma africana.

En el curso de los siguientes años, grupos armados de ambos bandos de la guerra civil colombiana intensificaron sus incursiones en busca de su tajada de las ganancias, incluyendo la introducción de cultivos con fines de uso ilícito como la coca, produciendo graves y extensas devastaciones. Hoy día se destruyen cada año hasta 81 mil hectáreas de bosques pluviales del Pacífico como consecuencia de la extracción industrial de oro en una zona ya de por sí devastada por la tala masiva de árboles para la industria maderera. Los

impactos también han afectado las culturas tradicionalmente asentadas de comunidades indígenas y negras afectando sus relaciones sociales y sus vínculos con la naturaleza.

Crece la violencia y el desplazamiento masivo

La lucha por el control de los recursos de la costa ha tenido como resultado el desplazamiento sistemático de más de un millón de afrocolombianos y, en algunos casos, de aldeas enteras. En muchos de sus territorios, los afrocolombianos se han encontrado literalmente en la línea de fuego entre la fuerza pública y los actores armados fuera de la ley que se disputan el territorio, las ganancias derivadas de la agricultura y la minería, y el control sobre los cultivos con fines de uso ilícito.

El 2 de mayo de 2002, en uno de los peores asesinatos en masa hasta la fecha, se calcula que 120 afrocolombianos de las comunidades del Pacífico murieron cuando una bomba lanzada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cayó sobre una iglesia en Chocó, el departamento con la mayor población de afrocolombianos. Esta matanza ocurrió poco después de las masacres en el Alto Naya donde 150 personas fueron asesinadas y descuartizadas con motosierras, y en las riberas del Río Yurumanguí donde resultaron muertas otras 12. Producto de estas incursiones se registraron grandes desplazamientos. Entre 1999 y 2001, se registraron 7,200 desplazados sólo en Buenaventura, ciudad puerto sobre el Pacífico colombiano.

Surgimiento de los derechos de los afrocolombianos

Ante este trasfondo de muerte, la convicción de Grueso y otros activistas de construir un país incluyente y democrático que respete las diferencias han hecho del PCN uno de los sectores más visibles y efectivos del movimiento social afrocolombiano. La aprobación de la “Ley 70” en 1993 representó una victoria sumamente importante. L. Grueso desempeñó un papel decisivo en la campaña por esta histórica ley que oficialmente otorga reconocimiento legal a la comunidad afrocolombiana como etnia particular con derechos culturales y territoriales sobre las tierras que han ocupado durante cientos de años.

La gestión de L. Grueso junto a Mercedes Moya como delegadas del naciente PCN ante los miembros de La Asamblea Nacional Constituyente en 1991 fue decisiva para la inclusión del Artículo Transitorio 55 que reconoció el derecho cultural y territorial a las comunidades negras ribereñas basada en sus prácticas tradicionales de producción.

Esperanza en medio del conflicto

Desde ese momento, el PCN y L. Grueso se han valido de la Ley 70 para oponerse con éxito a proyectos destructivos de desarrollo tales como la tala de árboles para la industria maderera y las plantaciones de aceite de palma africana, así como la minería del oro mecanizada y las camaroneras industriales que han devastado los manglares locales. También han logrado que el gobierno aumente las restricciones destinadas a mitigar el daño ecológico y cultural de la costa. Con el fin de apoyar la recuperación de la agricultura tradicional y el fortalecimiento de la identidad cultural, ella organizó talleres educativos para renovar el cultivo del arroz y la caña de azúcar a lo largo del Río Yurumanguí de manera que las comunidades ribereñas puedan cultivar sus propios alimentos y alcanzar la autosuficiencia económica.

L. Grueso y otros activistas que han propuesto modelos de desarrollo cultural y ecológicamente sostenibles se han visto enfrentados a intereses particulares—en ocasiones arriesgando sus propias vidas. Algunos han sido víctimas de persecuciones y señalamientos; otros han sido asesinados. El año pasado, un candidato afrocolombiano a la alcaldía del municipio de Roberto Payán y defensor de La Ley 70/93 fue asesinado por criticar públicamente las actividades de la guerrilla en su localidad. Esta historia de asesinatos selectivos a líderes afrocolombianos en la costa Nariñense se ha repetido en 75 casos desde 1998, fecha en que fue asesinado a manos de paramilitares el Sr. Francisco Hurtado, primer presidente de un consejo comunitario afrocolombiano, mientras adelantaba un censo en su comunidad del Río Mira. Hurtado había ganado una demanda (tutela) por los atropellos antiecológicos a su territorio por parte de explotadores de minerales y de los palmeros. De la misma manera fue asesinada en el 2002 la hermana Yolanda Cerón, quien apoyaba los proyectos de Ley 70 y la conservación de cultivos tradicionales en el Río Patia. Muerte que conmocionó a todo el país. En 2001 siete ecologistas fueron asesinados durante una excursión en el Parque Nacional Puracé.

A pesar de estos peligros, L. Grueso y otros miembros del PCN persisten en su lucha motivados por un plan amplio de sostenibilidad para toda la región del Pacífico que refleje la visión de un desarrollo basado en valores culturales y ecologistas afrocolombianos e indígenas. En este mismo sentido L. Grueso trabaja a nivel institucional para proteger a los parques nacionales de Colombia, y en especial los ubicados en la región del Pacífico, de la fumigación antidroga y la amenaza de privatización. El gobierno colombiano ha estado reduciendo cada vez más la dotación de personal y el financiamiento de la dependencia gubernamental encargada de administrar los parques nacionales, con el objetivo de entregar a entidades privadas la gestión del parque. L. Grueso critica estas maniobras abiertamente violatorias del plan originalmente elaborado para administrar el parque, el cual establecía una innovadora alianza entre funcionarios administrativos y dirigentes comunitarios para hacer efectiva la conservación de la naturaleza.

Ecologismo negro: un movimiento global de los afrodescendientes

L. Grueso es ampliamente conocida como una de las personas más inspiradoras al frente del movimiento “ecologista negro” latinoamericano, uno de los movimientos de base más importantes y estimulantes de los últimos años en defensa de los derechos humanos, culturales y el ambiente frente a los embates de la economía global y la represión militar.

Ella misma traza las raíces de su activismo a su niñez como hija de un pescador, líder cooperativo, y una maestra en las selvas de la costa del Pacífico, donde los aldeanos remaban sus canoas por el río, los hombres cazaban cerdos salvajes y a los niños se les enseñaba a respetar la naturaleza. Ella recuerda haber visto cómo se desmoronaba ese mundo bajo la presión de un desarrollo económico agresivo que destruyó enormes zonas forestales en aras de la industria maderera y causó la ruptura de la comunidad estrechamente unida de su juventud.

La lucha continúa

Hoy día, L. Grueso y las 120 organizaciones que hacen parte del PCN siguen presionando al gobierno colombiano para que asuma una postura más firme *a favor* del desarrollo sostenible y *en contra* de las medidas y organizaciones militaristas que agudizan el conflicto armado, por salidas negociadas al conflicto y el respeto a la autonomía de las comunidades. La dirigente afrocolombiana ha hablado con congresistas y organizaciones de apoyo estadounidenses, en universidades a lo largo y ancho de Estados Unidos y Canadá, y en reuniones convocadas por organismos de comercio internacional como la Organización Mundial del Comercio, expresándose abiertamente en contra de la ayuda y las inversiones estadounidenses y europeas a operaciones colombianas vinculadas con la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

Durante su visita a Estados Unidos para aceptar el Premio Medioambientalista Goldman, L. Grueso planea regresar a la sede del Congreso norteamericano para exponer sus críticas frente a la propuesta del gobierno de Bush de enviar \$618 millones (principalmente en ayuda militar) a Colombia, así como su oposición a las medidas antinarcóticos de fumigación con herbicidas altamente tóxicos que el gobierno norteamericano apoya para Colombia y seis de sus países vecinos. Le preocupa en especial que estas medidas han contribuido a crear extensos problemas de salud en las comunidades vecinas y causado daños a los cultivos locales.

“L. Grueso y el PCN han logrado tener el mayor efecto en la puesta en práctica de una visión y estrategia innovadora para un desarrollo sostenible basado en el matrimonio entre la ecología y la cultura”, dijo Enrique Leff Zimmerman, coordinador de la Red de Formación Ambiental para la América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

#